

El fondo europeo de recuperación dará prioridad a renovables y construcción

El plan de Bruselas para relanzar la economía pone énfasis en la rehabilitación de edificios

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas
La rehabilitación de viviendas y edificios públicos y el impulso a las energías renovables protagonizarán la fase más urgente del plan de recuperación económica que la Comisión

Europea tiene previsto aprobar este mes, según el documento de preparación al que ha tenido acceso EL PAÍS. Bruselas espera financiar el plan con un fondo que podrá movilizar hasta 1,6 billones de euros y quiere que el

relanzamiento de la economía después de la pandemia se haga con criterios que canalicen las ayudas y los préstamos hacia los proyectos con más visión de futuro desde el punto de vista medioambiental y digital.

“El riesgo es que la crisis de liquidez [provocada por la pandemia] mute en una depresión económica”, señala el documento que recoge los grandes ejes del futuro plan de recuperación. El texto incluye ya “la lista de áreas prioritarias donde se puede actuar con el mayor potencial”. Y anticipa buena parte del contenido de un plan que la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, tiene previsto aprobar el 13 o el 19 de este mes, y no mañana, como se había anunciado inicialmente. La propuesta de Von der Leyen apunta a una fusión de los planes previos a la pandemia, como el Pacto Verde y la agenda digital, con un programa de recuperación cuyo principal objetivo, según el organismo comunitario, debe ser concentrar la inversión en sectores y actividades con un futuro sostenible.

“A corto plazo, muchas inversiones verdes y muchos proyectos digitales ya están tecnológicamente maduros pero necesitan el impulso para comenzar”, señala el informe. Bruselas aboga por espolpear esos proyectos en la primera fase del plan de recuperación, que se extendería entre 12 y 24 meses. Entre las actividades favorecidas sobresalen desde la construcción a la digitalización de servicios e industrias o el desguace de vehículos.

La segunda fase, a medio plazo, abarcaría la inversión que se dirigiría, por ejemplo, a renovar la producción siderúrgica, a la producción de hidrógeno limpio o al desarrollo de la inteligencia artificial. El documento no entra en detalles sobre la financiación, pendiente de una dura negociación entre los socios. Alemania y Holanda se resisten a cualquier trasvase de dinero y Francia, Ita-



Von der Leyen interviene durante la conferencia de donantes de ayer para recaudar fondos contra el coronavirus.

lia o España reclaman vías para mutualizar la factura que dejará la crisis. El texto subraya, sin embargo, que “un plan de recuperación rápida requerirá un fuerte elemento de solidaridad entre los miembros (...) tanto en la fase inmediata como a medio plazo”.

La Comisión alude a todas las fórmulas de financiación mencionadas en documentos anteriores, desde la emisión de deuda con cargo a la UE (bonos de recuperación) a avales del presupuesto comunitario para respaldar inversiones a través del BEI. Y advierte que no puede haber tabúes. “To-

das las posibilidades para reunir financiación pública, incluidas las opciones no convencionales, deben explorarse”, afirma.

La lista de áreas prioritarias para una intervención de fondos públicos y privados sin precedentes arranca con la llamada “oleada de renovación” inmobiliaria, un capítulo que, según Bruselas, puede requerir una inversión de hasta 250.000 millones anuales.

“Los edificios son los mayores consumidores de energía en la UE y son responsables del 36% de las emisiones de gases con efecto invernadero”, recuerda el texto al

que ha tenido acceso este diario. El documento subraya que el 75% del parque inmobiliario se construyó antes de que estuvieran en vigor las primeras directivas sobre eficiencia energética. Y que el 80% de esos edificios seguirán en pie en 2050, cuando la UE se propone alcanzar la neutralidad en emisiones. “La necesidad de una rehabilitación generalizada está clara”, concluye el texto de la Comisión. Bruselas calcula que la oleada de rehabilitaciones deberá impulsarse con fondos públicos por valor de 50.000 millones de euros al año. La contribución eu-

ropea a esa partida pasaría, según el documento, por los fondos estructurales o el BEI. El plan incluiría subsidios tanto a particulares como a Ayuntamientos.

El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde, señalaba ya la rehabilitación de viviendas como una de las áreas prioritarias durante una reciente entrevista con EL PAÍS. “La renovación será inevitable en cualquier caso. Así que si la priorizamos, ponemos a trabajar a todo un sector de manera inmediata, con puestos de trabajo que no se pueden deslocalizar y que serán necesarios en cada pueblo, ciudad o gran urbe”, señalaba el holandés.

Las energías renovables aparecen como segunda gran prioridad en el plan de recuperación, con una movilización de 75.000 millones anuales. Bruselas calcula que la aportación del plan podría ascender a 10.000 millones anuales con un potencial de apalancamiento entre medio y alto. Pero advierte que en este sector la intervención europea consistirá “principalmente en préstamos, con un limitado elemento de subsidios en función de la madurez de la tecnología”.

La revolución para un transporte limpio, como la define el documento de la Comisión, requerirá una inversión de 40.000 millones al año. Pero como en otras actividades, Bruselas no pretende destinar tan ingentes recursos para recuperar la movilidad contaminante previa al coronavirus. “ Toda una industria tendrá que resetear sus cadenas de suministro y buscar unos vehículos y unos servicios de movilidad para una nueva y dura demanda”, vaticina el organismo comunitario.

El despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos sin emisiones; la renovación de las flotas de taxis, autobuses y vehículos compartidos; los incentivos para mandar al desguace a los coches antiguos, o la construcción de vías exclusivas para bicicletas y transporte público figuran entre los proyectos a los que la UE podría dirigir su financiación.

La digitalización será el objetivo común que cubra la intervención en todos los sectores. La Comisión estudia la posibilidad de crear una línea especial de financiación que permita impulsar las inversiones más arriesgadas de la revolución tecnológica.

OPINIÓN / SANTIAGO CARBÓ VALVERDE

Ayudas asimétricas

Hay paralelismos entre la crisis financiera y la sanitaria que sacan algunas vergüenzas de Europa. Una cosa es clara, es mejor estar dentro que fuera. Hace mucho frío fuera del euro. Eso sí, la insolidaridad —salvo la acción del BCE— parece abrumadora. No solamente por el gradualismo, falta de empatía y tardanza en la entrega de los fondos comunitarios comprometidos para la pandemia. Tampoco porque el debate sobre los fondos de reconstrucción se posponga y se advierta sobre su condicionalidad. Debería también preocuparnos que los países del núcleo del euro —con Alemania a la cabeza— nos están “comiendo la tostada” en materia de ayudas públicas a empresas.

No porque presten un apoyo fiscal dentro de las normas a su tejido productivo. Eso sería comprensible. Más aún con su mayor margen para gasto público. Sin embargo, gran parte de esas ayudas públicas contravendría, en cualquier otro escenario, los principios competitivos de la UE. Pero con el marco transitorio aprobado con la covid-19, se puede solicitar una aprobación especial de la Comisión Europea.

Con la excepcionalidad actual, parece comprensible que las reglas de competencia puedan relajarse. Pero esa misma situación extraordinaria recomendaría que, en un entorno de mercado único, los países más afectados por la pandemia recibieran más ayuda y que la que presten o inviertan

en capital de empresas no computara —o lo hiciera atenuadamente— a los efectos de protocolo del déficit. Ninguna de esas cosas está ocurriendo. Entre tanto, algunos países parecen “saltarse” otras reglas. Por ejemplo, Alemania, concentrando hasta la fecha la mitad de las cantidades aprobadas por Bruselas como ayuda excepcional a empresas. Suecia, Dinamarca, Holanda o Austria también tienen cuantiosos “permisos excepcionales”. Buena parte de ellos para, al igual que España e Italia, dar garantías públicas a préstamos privados. Otros cuantiosos, no obstante, para inyectar capital directamente en sus empresas.

Desde la crisis financiera de 2008, algunos países se beneficiaron comparativamente de esa asimetría. El “marcador” (scoreboard) de ayudas públicas a empresas de la Comisión Europea muestra que Alemania, Austria o Dinamarca concedieron a sus empresas el triple de ayuda pública (con aprobación especial de la UE) que España o Italia. Va a resultar que las diferen-

cias de competitividad pueden tener que ver, al menos parcialmente, con el apoyo de papá Estado. No es el único ejemplo. La unión bancaria sigue incompleta y los bancos (y otras empresas) de esos mismos países cuentan con la denominada “garantía implícita” (respaldo en caso necesario de sus más solventes Tesoros nacionales) que se refleja en sus ratings y les permite financiarse más barato.

España debería actuar doblemente. Primero, reforzar con intensidad los mecanismos de liquidez a empresas y autónomos y acometer, donde sea necesario, esquemas temporales (ojo, no nacionalizaciones) de recapitalización participativa. Segundo, una negociación más dura con la carta de un mayor escrutinio y, en su caso, incluso denuncia en instancias europeas (como ha hecho Ryanair) de las ayudas claramente asimétricas que otros países están otorgando a sus empresas y que distorsionan permanentemente la competencia y el mercado único.